
ALONSO GARCÍA, R.

Tratado de Libre Comercio, Mercosur y Comunidad Europea. Solución de controversias e interpretación uniforme, Madrid, Editorial McGraw-Hill, 1997, 177 págs.

La Comunidad Europea, la zona de libre comercio creada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC) y el Mercosur o Mercado Común del Sur, constituyen, junto a Japón, las mayores potencias económicas a nivel internacional. Estos bloques económicos, creados en la última etapa del siglo XX, responden a dos fenómenos: por un lado, a la internacionalización de la economía y, por otro, a la formación de grandes bloques de integración de carácter económico.

Una de las principales dificultades con las que se han tenido que enfrentar estos fenómenos de regionalización ha sido el establecimiento de un sistema capaz de resolver los posibles conflictos que puedan surgir, esto es, crear un sistema de solución de controversias que sea aplicable en el marco de cada uno de estos bloques regionales.

El libro objeto de esta reseña se centra en el estudio del sistema escogido por cada uno de ellos, tanto para resolver los conflictos protagonizados por los distintos Estados, como para conseguir la uniformidad en el plano normativo.

Bajo estas perspectivas, y con extrema lucidez, la obra queda vertebrada en cuatro capítulos. El primero de ellos está dedicado al sistema de solución de controversias existente en el TLC. Desde que, en diciembre de 1992, los presidentes Bush, Salinas y Mulroney, en nombre de Estados Unidos, México y Canadá respectivamente, firmaron el TLC, se estableció entre sus objetivos funda-

mentales, la creación de procedimientos eficaces que resolviesen las posibles controversias surgidas entre los distintos Estados Parte. Aunque la instauración de un procedimiento general resultaba particularmente difícil, sobre todo si se tiene en cuenta que Canadá, Estados Unidos y México cuentan con sistemas jurídicos diferentes, se consiguió articular un sistema general de resolución de controversias inspirado en el existente en el ámbito del GATT.

En este primer Capítulo, el Profesor R. Alonso García analiza las principales incógnitas que suscita el sistema de solución de controversias recogido en el TLC. Este Capítulo inicial se divide en tres partes. En la primera, el autor realiza un estudio del régimen jurídico aplicable con carácter general a las controversias entre Estados, regulado en el Capítulo XX del TLC. Este régimen presenta tres variantes diferentes según la materia sobre la que versen los posibles conflictos, ya se trate de cuestiones relacionadas con el *antidumping* (Capítulo XIX del TLC), medio ambiente (Acuerdo de Cooperación Ambiental) o materia laboral (Acuerdo de Cooperación Laboral). En la segunda parte, se analizan los procedimientos aplicables en las controversias que se susciten entre los Estados y los particulares. En este punto, el autor distingue: por un lado, el régimen que regula las controversias existentes entre los particulares y los Estados en materia *antidumping* y, por el otro, el régimen empleado para resolver conflictos en materia de inversiones. La tercera parte se refiere a las controversias *inter privados*, que se solventarán en el marco de los procedimientos nacionales, con posibilidad, según lo dispuesto en el art. 2022 del TLC, de utilizar el arbitraje u otros medios alternativos, en los que puede participar la Co-

misión de Libre Comercio, instaurada por el TLC o, en su defecto, cualquier Estado Parte.

El Capítulo II está consagrado al sistema de solución de controversias existente en el marco del Mercosur. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay firmaron el 26 de marzo de 1991 el Tratado de Asunción por el que se creó el Mercosur, considerado como el bloque integracionista más importante de América Latina. Mercosur representa a unos 200 millones de habitantes y, desde su creación, el volumen de las exportaciones entre los Estados Parte ha aumentado de 2.973 millones de dólares en 1990 a 3.942 en 1991. El Tratado de Asunción prevé en el Anexo III la instauración de un sistema de solución de controversias. Este sistema fue introducido por el Protocolo de Brasilia para la Solución de Controversias de 17 de diciembre de 1991. Este dispositivo, que se creó con carácter transitorio a expensas de la adopción de un sistema permanente, sigue vigente en la actualidad, aunque, con el Protocolo de Ouro Preto de 17 de diciembre de 1994, se han incorporado algunas modificaciones. En particular, se ha previsto, en palabras del propio autor, "una vía *sui generis* para la solución de controversias surgidas en el ámbito competencial de la Comisión de Comercio del Mercosur". Así, el Capítulo II dedica su primera parte al sistema aplicable cuando los sujetos de las controversias sean los Estados Parte y, una segunda parte, destinada al análisis del procedimiento a seguir cuando los sujetos de las mismas sean los particulares.

El Capítulo III analiza el mismo fenómeno desde la perspectiva de la Comunidad Europea. Esta, a diferencia de los otros dos bloques económicos, cuenta con un sistema jurisdiccional permanente. Según lo establecido en el artículo 164 del Tratado de la Comunidad Europea (Tratado C.E.), el titular

del sistema jurisdiccional comunitario es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE), llamado a garantizar el respeto del Derecho Comunitario en la interpretación y aplicación del Tratado.

Es por ello que el autor hace una breve descripción de la organización, el funcionamiento y la composición del TJCE para analizar, posteriormente, el *iter* procedimental destinado a dar solución a cuantos conflictos puedan surgir. Por un lado, las discrepancias protagonizadas por los Estados miembros se resolverán aplicando lo dispuesto en los arts. 169, 170 y 171 del Tratado C.E. Por otro, para las desavenencias que enfrenten al poder público y a sus administrados, así como los conflictos que se produzcan entre los particulares se tratará de encontrar cabida a través del reenvío prejudicial descrito en el artículo 177 Tratado C.E.

Es interesante subrayar el examen que se realiza en este tercer Capítulo de la cuestión prejudicial, configurada como la vía escogida por el TJCE para armonizar la interpretación y aplicación de las normas comunitarias. En el texto se pone de manifiesto la importancia de la cuestión prejudicial, considerándola como "la piedra angular de la Comunidad". En este sentido, el Profesor Lecourt proclama que la respuesta dada a una cuestión prejudicial pronunciada por el TJCE es "no sólo una misma norma común", sino que dicha norma debe ser "interpretada y aplicada de la misma manera en toda la extensión de un mismo territorio por los Tribunales de todos los Estados miembros".

El Capítulo IV se ha titulado "La Solución de Controversias e Interpretación Uniforme". En ella, se efectúa un análisis comparativo de la aptitud de los distintos sistemas de integración anteriormente analizados, para mantener, a través de sus actuales regí-

menes de solución de controversias, una interpretación uniforme de la norma común y alcanzar de este modo una uniformización jurídica definitiva y eficaz. Esta última parte se apoya en un estudio de la práctica jurisprudencial de las controversias acaecidas hasta la fecha en el marco del TLC, del Mercosur y de la Comunidad Europea.

En suma, la obra de referencia destaca por la abundante bibliografía manejada y, por constituir, desde nuestro punto de vista, un imprescindible punto de partida para todo aquel que pretenda realizar un estudio comparado de los fenómenos de integración y de internacionalización de la economía del siglo XX. Con ella, se cubre pues una laguna importante que hasta ahora existía en la doctrina española, que carecía de un libro específico que abarcara todos los aspectos de los sistemas de controversias surgidos en estos bloques de integración.

Begoña Pérez Chuliá

Profesora Asociada del Depart. de
Derecho Internacional de la
Universidad de Valencia

**CORTEN, Olivier/ KLEIN,
Pierre**

Droit d'ingérence ou obligation de réaction?, Eds. Bruylant, 2.^a edición, 1996, 309 pp.

Los dos autores han decidido publicar una segunda edición de la obra publicada en 1992 con un título sugestivo, aunque no nuevo, añadiendo un apéndice en el que se recoge un trabajo ya publicado por los autores. Estos han decidido que la publicación de una segunda edición estaba justificada porque el tema sigue siendo actual (ver

las palabras previas de los autores, p. VIII). Es obvio que el tema suscita una serie de controversias complejas que los autores reconducen con un cierto espíritu egocéntrico a soluciones que ellos denominan clásicas, pero que para otros son arcaicas y es en este ámbito en el que los autores no analizan con detalle todas las pormenoridades jurídicas que encierra la cuestión. Por otro lado, hay que resaltar que en muchos casos las publicaciones se retrasan por razones ajenas al autor. Sin embargo, publicar una segunda edición sin incorporar para nada a la doctrina hispana, que ha seguido con el interés el desarrollo de esta cuestión, revela sinceramente un carácter "trop unilateral" de la investigación. La verdad no siempre es fácil de establecer.

Romualdo Bermejo García

Catedrático de Derecho
Internacional Público

NAVARRO BATISTA, Nicolás

Parlamento Europeo y poder normativo en la Unión Europea, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 1995, 280 pág.s.

La Universidad de Salamanca ha publicado una excelente tesis doctoral. Algunas notas distinguen la calidad del trabajo, destacan el rigor científico, la pulcritud de la redacción y una ilustrativa claridad expositiva. Estas distinciones no constituyen ninguna sorpresa, a sabiendas de que el producto investigador que se presenta procede de uno de los más prestigiosos Departamentos universitarios españoles dedicados al Derecho Internacional y Comunitario. Dicho ele-